



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ

Bogotá D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021).

REF.: ACCIÓN DE TUTELA No. 11001 4003 005-2021-00333-00

CÓDIGO DE TRÁMITE ASIGNADO: TUT327637

ACCIONANTE: ELIZABETH MOLINA OCAMPO

ACCIONADA: CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR y RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ.

Previamente a resolver sobre la admisión de la presente acción de tutela, se advierte que este Despacho no es competente para asumir su conocimiento, dado que de conformidad con el Art. 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 333 de 2021, que reglamentó el reparto de esta clase de demandas “...*Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos*”.

Precisamente, de los hechos y pretensiones materia de acción constitucional, se vislumbra como accionados los señores RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ y CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR, este último en su calidad de Gobernador del Departamento del Magdalena; así mismo del escrito tutelar, se advierte que el lugar en donde ocurre la presunta vulneración o amenaza a los derechos fundamentales de la actora es en la ciudad de **Santa Marta**, por cuanto la decisión que la tutelante pretende discutir mediante el amparo fue tomada en dicha localidad, que además coincide con el domicilio de la demandante y la sede en donde se encuentran los demandados. Por tal motivo, esta localidad es el lugar donde presuntamente ocurre la vulneración y donde se producen los efectos de la alegada vulneración de derechos fundamentales. Súmese que la actora, dirigió su acción al juez constitucional con sede en dicha ciudad (Santa Marta).

Sin embargo, a pesar de conocer el suscrito, los pronunciamientos del alto Tribunal Constitucional (Auto 124 de marzo 25 de 2009, M. P. Humberto Sierra P. y, 198 de mayo 28 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas), en cuanto no puede el operador judicial declararse incompetente cuando se desconocen las reglas de reparto, considera que deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional quien indicó: “*Ahora bien, esta Corporación ha precisado que en el evento de comprobarse la existencia de un reparto caprichoso o arbitrario de la acción de tutela, fruto de una tergiversación manifiesta de las reglas sobre el mismo, el caso debe ser remitido a la autoridad judicial a la cual corresponde su conocimiento de conformidad con las disposiciones previstas en las mencionadas normas[13]. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial de inferior jerarquía. Dicha remisión se fundamenta en que las reglas de reparto son obligatorias para las oficinas de apoyo judicial y los jueces que cumplen dicha labor, aunque no autorizan a los funcionarios judiciales a declararse incompetentes en ningún caso. En relación con lo anterior, la Sala Plena estima que, para determinar que se configura un reparto caprichoso o arbitrario, los jueces constitucionales deben observar las siguientes*

reglas[14]: (i) El incumplimiento de las normas de reparto no autoriza al juez a remitir la acción de tutela a otra autoridad judicial, salvo que el fallador verifique que el reparto transgrede de manera manifiesta y evidente principios esenciales de la administración de justicia. (ii) La existencia de reparto caprichoso o arbitrario debe establecerse en cada caso concreto. (iii) Respecto de acciones de tutela contra autoridades judiciales (numeral 5° del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017), en principio no se configura reparto caprichoso cuando se asigna la solicitud de amparo a un juez de mayor jerarquía, con independencia de que no se trate del superior correspondiente a su especialidad[15]. En síntesis, el respeto por el principio de jerarquía es un elemento que descarta la existencia de reparto caprichoso o arbitrario. (iv) En contraste, la jurisprudencia constitucional ha establecido que se presenta reparto caprichoso o arbitrario cuando se transgrede el principio de jerarquía, como en el caso de la distribución equivocada de las acciones de tutela interpuestas contra providencias judiciales emanadas de las Altas Cortes. (v) **En todo caso, el juez debe verificar que es competente en virtud del factor territorial**¹. (se destaca)

Por lo expuesto, este servidor considera que, no le asiste competencia para conocer de la acción de amparo constitucional y, en consecuencia, **dispondrá su remisión inmediata a la oficina judicial de reparto de los Juzgados Civiles Municipales de Santa Marta, para que sea repartida entre los señores Jueces Civiles Municipales de esa ciudad (por factor territorial), para su competencia.**

En mérito de lo expuesto, el suscrito **Juez Quinto Civil Municipal de Bogotá,**

RESUELVE

PRIMERO: ABSTENERSE de dar trámite a la presente acción de tutela, por falta de competencia, factor territorial.

SEGUNDO: Se **ORDENA su remisión inmediata a la oficina judicial de reparto de los Juzgados Civiles Municipales de Santa Marta.**

TERCERO: Por secretaría librense las comunicaciones de que trata el Parágrafo 1° del artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



JUAN CARLOS FONSECA CRISTANCHO
El Juez

¹ Corte Constitucional A-269 de 2019